

Recurso de revocación

Expediente: 4/2022-REV-CG

Actor: Carlos Enrique Mendoza Santibáñez

Autoridad responsable: Consejo General
del Instituto Electoral del Estado de Guanajuato

Guanajuato, Guanajuato, a dieciocho de mayo de dos mil veintidós¹.

Resolución del recurso de revocación interpuesto en contra del acuerdo CGIEEG/023/2022 dictado por este Consejo General del Instituto Electoral del Estado de Guanajuato².

1. Antecedentes.

1.1. Convocatoria para el proceso de elección de la terna. El quince de marzo mediante acuerdo CGIEEG/017/2022, el Consejo General aprobó la emisión de la convocatoria de la consulta pública para el proceso de elección de la terna que será remitida al Congreso del Estado de Guanajuato para la designación de la persona titular del Órgano Interno de Control del Instituto Electoral del Estado de Guanajuato.

1.2 Desarrollo de las etapas de la convocatoria. Del diecisiete de marzo al veintiséis de abril, se desarrollaron las etapas establecidas en la convocatoria aprobada mediante el acuerdo CGIEEG/017/2022, excepto la aprobación y remisión de la terna al Congreso del Estado.

1.3 Acuerdo impugnado. El veintinueve de abril, el Consejo General de este Instituto emitió el acuerdo CGIEEG/023/2022 mediante el cual se aprobó la terna, derivada de la consulta pública realizada por el Consejo General del Instituto, que será remitida al Congreso del Estado de Guanajuato para la designación de la persona titular del Órgano Interno de Control.

1.4 Remisión de la terna. El dos de mayo, la Secretaría Ejecutiva del Instituto remitió al Congreso del Estado de Guanajuato copia certificada del acuerdo CGIEEG/023/2022, así como el original de los expedientes de las personas que integran la terna aprobada, para la designación de la persona titular del Órgano Interno de Control del Instituto.

1.5 Recepción de acuerdo. El dieciséis de mayo, se recibió en la Oficialía de Partes de este Instituto el oficio TEEG-IP-ACT-80/2022, signado por el actuario del Tribunal Estatal Electoral de Guanajuato, mediante el cual remite copia certificada del acuerdo de radicación y requerimiento, dictado en el expediente del juicio para la protección de los derecho político-electorales del ciudadano TEEG-JPDC-08/2022, promovido por Carlos Enrique Mendoza Santibáñez.

¹ En lo subsecuente todas las fechas corresponden al año dos mil veintidós, salvo precisión en contrario.

² En adelante: Instituto

2. Trámite y substanciación del recurso de revocación.

2.1. Interposición del recurso de revocación. El tres de mayo, se recibió el escrito signado por Carlos Enrique Mendoza Santibáñez —quien participó en el proceso de selección de la terna—, mediante el cual promueve **recurso de revocación** en contra del acuerdo **CGIEEG/023/2022**, referido en el antecedente 1.3 de la presente resolución.

2.2. Radicación. El once de mayo se emitió el auto de radicación y admisión del recurso promovido, registrándose bajo el número de expediente **4/2022-REV-CG**; mismo que fue notificado personalmente al recurrente a las catorce horas con veinticinco minutos del mismo día.

Asimismo, se instruyó a la Unidad Técnica Jurídica y de lo Contencioso Electoral que formulara el proyecto de resolución correspondiente.

2.3. Vista a tercera interesada. El once de mayo, a las once horas con cincuenta y cinco minutos, se dio vista a la ciudadana Siboney Ortega Aviña, integrante de la terna aprobada mediante acuerdo CGIEEG/023/2022, para que en el término de cuarenta y ocho horas, contadas a partir de la notificación, realizara alegaciones u ofreciera pruebas, de estimarlo pertinente. Lo anterior, dado que la pretensión del ciudadano Carlos Enrique Mendoza Santibáñez es incompatible con la inclusión de dicha ciudadana en la integración de la terna.

La ciudadana Siboney Ortega Aviña no realizó manifestación alguna en el plazo otorgado.

3. Consideraciones de la resolución.

3.1 Competencia. Este Consejo General es competente para conocer y resolver el recurso de revocación interpuesto, de conformidad con lo previsto en los artículos 392 y 394 de la *Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de Guanajuato*³.

Se actualiza el supuesto de procedencia del recurso de revocación previsto en el artículo 392 de la ley electoral local, toda vez que se interpone en contra de un acuerdo emitido por este Consejo General, del cual no procede algún otro medio de impugnación previsto en el ordenamiento legal en comento⁴.

3.2. Estudio de las causales de sobreseimiento. En el presente asunto no se actualiza alguna causal de sobreseimiento, como se razona a continuación:

a) La fracción I, del artículo 421 de la ley electoral local no se actualiza, pues no existe constancia en el expediente de la que derive que el recurrente se haya desistido de la impugnación promovida.

³ En adelante: ley electoral local o normativa electoral.

⁴ La Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, en el expediente SUP-REC-188/2022, sostiene que conforme a la doctrina procesal los recursos ordinarios se clasifican en horizontales y verticales. Los recursos horizontales son aquellos resueltos por quien emitió el acto, es decir, revisa su propia actuación; para lo cual, se requiere ineludiblemente la instancia de parte, dado que la autoridad de manera oficiosa no puede revocar sus propios acuerdos, lo cual acontece en el caso.

b) No existe constancia en autos de la que derive que el acto reclamado sea inexistente o que hayan desaparecido las causas que motivaron la interposición del medio de impugnación, de tal manera que haya quedado sin materia, siendo entonces que, en la especie, no se actualizan las causales de sobreseimiento previstas en las fracciones II y III del artículo 421 de la ley electoral local.

c) A partir de la admisión del recurso de revocación, determinada en el auto del once de mayo, no se actualiza alguna causa de improcedencia del recurso, como se detalla a continuación:

La fracción I, del artículo 420 de la ley electoral local no se actualiza, toda vez que el escrito mediante el cual se interpone el recurso de revocación sí está firmado por el recurrente.

El supuesto previsto en la fracción II, del artículo 420 de la propia ley electoral local no se actualiza, pues la impugnación presentada se interpuso dentro del término de cuarenta y ocho horas previsto por el artículo 393 de la propia normativa electoral, debido a que esta autoridad tiene al promovente por conociendo del acuerdo que impugna a partir de la presentación de su recurso.

Cabe precisar que el acuerdo impugnado CGIEEG/023/2022 fue aprobado por el Consejo General el veintinueve de abril del año que transcurre a las diez horas con cuarenta y ocho minutos y, de la razón de recibido impuesta en el recurso, se aprecia que fue presentado en la Oficialía de Partes de este Instituto el tres de mayo a las dieciséis horas con cuarenta y seis minutos, momento en el que se tiene al promovente por conociendo del acuerdo.

No se surte el supuesto jurídico previsto en la fracción III del artículo 420 de la ley electoral local considerando que el ciudadano Carlos Enrique Mendoza Santibáñez participó en el proceso para integrar la terna, derivada de la consulta pública realizada por el Consejo General del Instituto, que fue remitida al Congreso del Estado de Guanajuato para la designación de la persona titular del Órgano Interno de Control, por lo que el acto impugnado es susceptible de afectar el interés jurídico del promovente.

El supuesto previsto por la fracción IV del multicitado artículo 420 no se actualiza, puesto que, el acto impugnado no se considera consumado de forma irreparable, dado que el dos de mayo se remitió a la Presidencia del Congreso del Estado de Guanajuato el expediente formado con motivo de la aprobación del acuerdo impugnado por el que se integra la terna para la designación de la persona titular del Órgano Interno de Control de este Instituto, a efecto de que en términos del artículo 448 Bis de la ley electoral local realice la designación correspondiente. Además, el citado artículo, en su párrafo cuarto, contempla el supuesto relativo a que el Congreso del Estado pudiera regresar la terna al Consejo General para que éste elabore una nueva.

El promovente del recurso sí cuenta con la personería que ostenta, en virtud de que fue participante en el proceso para integrar la terna, al existir registros en esta institución que lo acreditan con tal carácter, por lo que en tal sentido no se actualiza la causal de improcedencia establecida en la fracción V del artículo 420 de la ley electoral local.

Tampoco se actualiza la hipótesis jurídica prevista en la fracción VI del artículo en mención, dado que la legislación electoral en vigor no prevé la existencia de un

medio de impugnación que debiera promoverse de forma previa al recurso de revocación, para obtener la modificación, revocación o anulación del acuerdo impugnado.

Ahora bien, en lo que respecta a la fracción VII del artículo 420 de la ley electoral local, como se desprende del antecedente **1.5**, el ciudadano Carlos Enrique Mendoza Santibáñez promovió juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano en contra del acuerdo CGIEEG/023/2022, por el cual se integró la terna.

Sin embargo, el Tribunal Estatal Electoral de Guanajuato no se ha pronunciado sobre la admisión del medio de impugnación, ya que en el auto de referencia se señala que una vez que este Instituto atiende el requerimiento que se ha formulado —en el que se le concedió un plazo de cinco días hábiles—, el órgano jurisdiccional hasta entonces procederá a revisar el cumplimiento de los requisitos previstos en la ley electoral local para tal medio de impugnación.

Por lo anterior, y en aras de garantizar una tutela efectiva, es que este Consejo General considera que no se actualiza la causal materia de análisis.

Además, con tal determinación se atiende el principio de definitividad que regula el sistema de medios de impugnación en materia electoral local, conforme al cual, previo acudir a la instancia jurisdiccional se deben agotar los remedios jurídicos de carácter administrativo previstos en la ley electoral local. Lo cual, es acorde a lo dispuesto por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en la sentencia del recurso de reconsideración SUP-REC-188/2022⁵.

También, en ese medio de impugnación la Sala Superior señaló que conforme al sistema normativo, se establece un sistema de medios de impugnación de la competencia de la autoridad administrativa electoral y de la autoridad jurisdiccional en el ámbito local, conforme al cual se dota de definitividad a los distintos actos y etapas de los procesos electorales; lo cual impone la carga procesal de agotarlos previo a acudir a la instancia jurisdiccional en los casos en que expresamente lo determina la norma.

El recurso de revocación no se interpuso contra actos o resoluciones que hayan sido materia de otro medio de impugnación que haya sido resuelto en definitiva, ni contra actos o resoluciones emitidos en cumplimiento a una resolución definitiva dictada en un medio de impugnación, por lo que en tal sentido no se actualizan las causales de improcedencia que se prevén en las fracciones VIII y IX del artículo 420 de la ley electoral local.

Considerando que el acuerdo impugnado fue emitido por el Consejo General de este Instituto y no tiene previsto un medio de impugnación diverso al interpuesto por el recurrente, no se surte la hipótesis contenida en el artículo 420 fracción X de la ley electoral local.

Finalmente, no se advierte la actualización de alguna diversa causa de improcedencia que derive de las disposiciones normativas contenidas en la ley electoral local.

⁵ Visible en:

https://www.te.gob.mx/Informacion_juridiccional/sesion_publica/ejecutoria/sentencias/SUP-REC-0188-2022.pdf

d) Sobre las causales de sobreseimiento previstas en la fracción V, del artículo 421 de la ley electoral local, esta autoridad no cuenta con información de la cual se pueda desprender alguna de las causales contempladas en la referida fracción, por lo cual no se actualizan las causales de sobreseimiento previstas en dicha disposición normativa.

3.3 Oportunidad. Tal como se revisó en el apartado anterior de esta resolución, el recurso de revocación promovido por Carlos Enrique Mendoza Santibáñez en contra del acuerdo CGIEEG/023/2022 se presentó oportunamente, dentro del término de cuarenta y ocho horas establecido en el artículo 393 de la ley electoral local.

Lo anterior es así, dado que el acuerdo combatido se aprobó por el Consejo General de este Instituto el veintinueve de abril y la impugnación presentada por el ciudadano Carlos Enrique Mendoza Santibáñez para combatirlo se presentó el tres de mayo a las dieciséis horas con cuarenta y seis minutos, momento en el que se tiene al promovente por conociendo del acuerdo de conformidad con el artículo antes referido, lo que hace evidente su presentación oportuna. Con lo anterior, se garantiza al recurrente el derecho a un recurso efectivo, por el cual tenga la oportunidad de combatir el acto que le genera agravio.

3.4 Forma. El recurso de revocación presentado cumple con los requisitos de forma establecidos por el artículo 382 de la ley electoral local, toda vez que contiene el nombre y domicilio del promovente; se detalla el acto o resolución que se impugna; el organismo electoral del cual proviene el acto o resolución impugnado; también se detallan los antecedentes del acto o resolución recurrido; los preceptos legales que se consideran violados; además de expresarse los agravios que presuntamente causan al recurrente el acuerdo impugnado; y hace referencia a seis ligas electrónicas relacionadas con su impugnación.

3.5 Legitimación y personería. El ciudadano Carlos Enrique Mendoza Santibáñez está legitimado para interponer el recurso de revocación contra el acuerdo CGIEEG/023/2022, toda vez que participó en el proceso para integrar la terna, derivada de la consulta pública realizada por el Consejo General del Instituto, que fue remitida al Congreso del Estado de Guanajuato para la designación de la persona titular del Órgano Interno de Control.

3.6 Definitividad. Este requisito se surte en la especie, dado que, conforme a la ley electoral local, no procede ningún medio o recurso previo a través del cual pudiera ser combatido el acuerdo CGIEEG/023/2022, de manera que debe entenderse para los efectos de procedencia, como una determinación definitiva.

3.7 Síntesis de los agravios. De acuerdo con el contenido del escrito impugnativo, es posible agrupar en cuatro rubros principales los agravios vertidos por el ciudadano Carlos Enrique Mendoza Santibáñez, a saber:

- a) En primer término, refiere que el principio de paridad sólo es aplicable a puestos de representación política, titularidades de Secretarías de Estado o similares, pero no a los cargos de carácter técnico.
- b) Asimismo, refiere que la ley electoral local no contempla la atención al principio de paridad tal como se estableció en las bases de la convocatoria.

- c) Además, señala que en la convocatoria no se estableció con claridad la cantidad de hombres y mujeres que integrarían la terna, sino solo que se buscaría atender el principio de paridad, sin que lo convirtiera en obligatorio.
- d) Finalmente, refiere que la decisión tomada por el Consejo General resulta arbitraria y violenta los principios de igualdad de oportunidades, transparencia, equidad y objetividad.

3.8. Método de estudio. Como cuestión previa, es importante referir que el recurso de revocación interpuesto se rige por el principio de estricto derecho, por lo que no procede la suplencia de la queja, por tanto, este Consejo General no puede complementar las deficiencias u omisiones en el planteamiento de los agravios cuando no se deduzcan claramente de los hechos expuestos, permitiéndosele únicamente conocer y resolver con base en aquellos argumentos expresamente planteados por quien promovió el recurso. Lo anterior guarda relación con la tesis de nuestro más Alto Tribunal que lleva por rubro: AGRAVIOS. PRINCIPIO DE ERICTO DERECHO⁶.

Mencionado lo anterior, se señala que el análisis de los agravios se realizará de forma conjunta, agrupando los que son coincidentes y los que resulten diferentes se harán en apartados independientes, sin que con esto se cause algún perjuicio al ciudadano impugnante, pues lo relevante es que todos sus planteamientos sean revisados, según el criterio contenido en la jurisprudencia de la Sala Superior **4/2000**, de rubro: AGRAVIOS, SU EXAMEN EN CONJUNTO O SEPARADO, NO CAUSA LESIÓN.⁷

3.9 Decisión. No asiste la razón, al ciudadano impugnante. De acuerdo con lo que se razona en las siguientes líneas, los agravios vertidos por el ciudadano Carlos Enrique Mendoza Santibáñez resultan infundados e inoperantes, por lo que, procede confirmar el acuerdo CGIEEG/023/2022.

a) Son **infundados**, los argumentos impugnativos relativos a la aseveración del ciudadano Carlos Enrique Mendoza Santibáñez en el sentido de que el principio de paridad sólo es aplicable a puestos de representación política, titularidades de Secretarías de Estado o similares, pero no a los cargos de carácter técnico.

Se consideran **infundados**, toda vez que el cumplimiento del principio de paridad de género es un deber ineludible del Estado Mexicano y de todos sus órganos, niveles y órdenes de gobierno —entre los que se encuentra el Instituto Electoral del Estado de Guanajuato—, a la luz de los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y **progresividad**. Además, es un mandato claro que no se materializa solamente en la norma constitucional mexicana, sino también históricamente en la jurisprudencia de los máximos órganos jurisdiccionales del país y en los tratados internacionales de los cuales nuestro país forma parte.

Así lo refiere el artículo 1º de la *Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos*, al establecer que todas las personas gozarán de los derechos humanos ahí reconocidos, así como en los instrumentos internacionales en los que el Estado Mexicano sea parte.

⁶Registro digital: 256180, consultable en: <https://sjf2.scjn.gob.mx/detalle/tesis/256180>

⁷ Consultable en Tercera Época, Justicia Electoral. Revista del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, Suplemento 4, Año 2001, páginas 5 y 6. En la página de internet: <https://www.te.gob.mx/IUSEapp/tesisjur.aspx?idtesis=4/2000&tpoBusqueda=S&sWord=4/2000>.

Dicho numeral establece un criterio de interpretación de las normas derivadas de los derechos humanos conforme a la norma fundamental y los instrumentos convencionales, otorgando la protección más amplia y favorable. Del mismo modo, establece una obligación de **todas las autoridades**, para que, en el ámbito de sus competencias, velen por el respeto de los derechos humanos reconocidos en el bloque de constitucionalidad.

Del tercer párrafo del ordenamiento constitucional referido se desprenden: a) Los principios objetivos que rigen la observancia de los derechos humanos: universalidad, interdependencia, indivisibilidad y **progresividad**; b) Las obligaciones generales de las autoridades del país al respecto: protección, promoción y garantía, y c) Las obligaciones específicas: prevenir, investigar, sancionar y reparar⁸.

De esta forma, las autoridades están facultadas para hacer que se respeten los derechos humanos, sin que ello, se limite exclusivamente al texto de la norma nacional o internacional, sino que **se extiende a la interpretación que de ésta se realice**.

En ese sentido, dentro del conjunto de derechos humanos que las autoridades se encuentran obligadas a respetar, promover y garantizar, se encuentran los de igualdad y no discriminación, regulados en los artículos 1, párrafo quinto y, 4, así como el de paridad contenido en el artículo 41, todos de nuestra Carta Magna.

A raíz de la reforma constitucional de dos mil diecinueve conocida como «Paridad en Todo» se adicionó un párrafo al artículo 41 de la Constitución Federal, señalando que se debe observar el principio de paridad de género en los nombramientos de las personas titulares de las secretarías de despacho del Poder Ejecutivo Federal y sus equivalentes en las entidades federativas. Asimismo, la observancia de dicho principio constitucional es también obligatorio en la integración de los organismos autónomos.

Sin embargo, la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación⁹ interpretó que el alcance de la paridad de género se da a los puestos de toma de decisión relevantes para el país, al señalar:

«De acuerdo con el Dictamen de las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales, para la Igualdad de Género y de Estudios Legislativos del Senado de la República, relativo a las reformas mencionadas, las modificaciones tienen como objetivo garantizar la paridad en el poder ejecutivo, legislativo y judicial, así como a todos los órganos autónomos, entre ellos, los órganos de dirección del Instituto Nacional Electoral, lo cual debería hacerse extensivo para las entidades federativas; esto es, garantizar la paridad en los tres poderes de todos los estados de la República, municipios y organismos públicos autónomos locales.

En el objeto y descripción de las iniciativas se indicó lo siguiente:

“Por último, el planteamiento de la iniciativa es el de garantizar el principio de paridad en todo sentido, por lo que (...) propone que, en los casos en que el número de integrantes de un órgano colegiado sea

⁸ Así los señaló la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación al resolver el SUP-RAP-0452/2021

⁹ Ibid.

impar, se considerará la posibilidad de **privilegiar una mayor presencia de mujeres, con el propósito de revertir la desigualdad histórica de que han sido objeto**".

Por su parte, en el Dictamen de las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales y de Igualdad de Género de la Cámara de Diputados, en relación con la minuta de proyecto de decreto de reforma a diversos artículos de la Constitución Federal en materia de paridad, se indicó específicamente respecto del artículo 41 constitucional que:

"Es importante resaltar que las modificaciones planteadas al numeral en comento tienen como objeto garantizar el alcance de la igualdad sustantiva en el acceso a los espacios de poder público y de toma de decisiones, instalando la paridad de género en el acceso a la función pública, como medida permanente para la prevención y el combate de la brecha laboral y de incidencia política de las mujeres".

Esto es, de acuerdo con lo dictaminado por las Comisiones respectivas, el objetivo de la reforma constitucional de paridad consistió en implementar la transversalidad de este principio a fin de incluir a las mujeres en la toma de decisiones de los asuntos públicos.

(...)

En ese sentido, el principio de paridad, tanto por la Suprema Corte de Justicia de la Nación como por esta Sala Superior, se entiende como una medida constitucional que tiene como finalidad garantizar la **participación efectiva de las mujeres en cualquier toma de decisión de la vida pública del país** y, las normas que se refieran a ellas, aun cuando estén redactadas en términos neutrales, deberán procurar su mayor beneficio, atendiendo a la exclusión histórica y estructural de que han sido objeto.

Lo anterior, a partir de una interpretación progresiva del principio constitucional de paridad de género, de modo que **se aplique para cualquier cargo de decisión del servicio público.**»

Aunado a lo anterior, la Suprema Corte de Justicia de la Nación¹⁰ ha señalado que el Estado Mexicano se encuentra obligado a llevar a cabo acciones que hagan efectiva la paridad o por las cuales se logre. Además, sostiene que del análisis de las constancias del procedimiento del que derivó el Decreto denominado Paridad en Todo, se tiene que el «Poder Reformador buscó dar un paso más para el logro efectivo de la igualdad sustantiva, ya que es un componente esencial para eliminar la discriminación y la violencia contra las mujeres».

Asimismo, el Máximo Tribunal ha señalado que la igualdad sustantiva o de hecho, «radica en alcanzar una paridad de oportunidades en el goce y ejercicio real y efectivo de los derechos humanos de todas las personas, lo que conlleva que en algunos casos sea necesario remover y/o disminuir los obstáculos sociales, políticos, culturales, económicos o de cualquier otra índole que impidan a los integrantes de ciertos grupos sociales vulnerables gozar y ejercer tales derechos¹¹.»

¹⁰ En la jurisprudencia de rubro PARIDAD DE GÉNERO. EXISTE MANDATO CONSTITUCIONAL Y CONVENCIONAL PARA GARANTIZARLA EN LA INTEGRACIÓN DE LOS AYUNTAMIENTOS, TANTO EN SU VERTIENTE VERTICAL COMO EN LA HORIZONTAL, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 79, octubre de 2020, Tomo I, página 15.

¹¹ Jurisprudencia de rubro DERECHO HUMANO A LA IGUALDAD JURÍDICA. DIFERENCIAS ENTRE SUS MODALIDADES CONCEPTUALES, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación.

De manera que son **infundados** los agravios expuestos en el sentido de que el principio de paridad sólo es aplicable a puestos de representación política, titularidades de Secretarías de Estado o similares, pero no a los cargos de carácter técnico.

Pues tal como se señaló, con la reforma constitucional denominada Paridad en Todo, así como a la luz de los tratados internacionales que conforman el parámetro de regularidad constitucional, las mujeres tienen derecho a participar, ocupar cargos públicos y ejercer todas las funciones públicas en igualdad de condiciones que los hombres.

Además, como lo refiere la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, del marco constitucional y convencional que regula el principio de paridad se deriva «la obligación de las autoridades de instaurar medidas eficaces para lograr la representación equilibrada de los géneros en todos los planos gubernamentales, la paridad se constituye como una garantía y una herramienta para ello, **sin que pueda entenderse que es aplicable únicamente para un proceso de selección determinado.**»¹²

b) El agravio en que el ciudadano impugnante señala que la ley electoral local no contempla la atención al principio de paridad tal como se estableció en las bases de la convocatoria, también resulta **infundado**.

Ello, pues el actor sólo parte de la literalidad establecida en el artículo 448 Bis de la ley electoral local, en la cual no refiere expresamente que en la integración de la terna se atenderá al principio de paridad de género. No obstante, pierde de vista que la ley electoral local se encuentra dentro de un sistema normativo que rige el actuar de este Instituto y en el cual se vela por el respeto de los derechos humanos reconocidos en el bloque de constitucionalidad. Pues tal y como quedó asentado en el inciso anterior, es obligación de todas las autoridades hacer que se respeten los derechos humanos, entre ellos, el de la igualdad entre hombres y mujeres, consagrados en el artículo 1º de la *Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos*, que se logra a través del principio de paridad.

En este sentido, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha concluido que en la interpretación de las normas debe acudirse a la interpretación más extensiva cuando se trata de reconocer derechos fundamentales, en atención al principio pro persona¹³.

Además, el artículo 6 de la ley electoral local establece que el Instituto promoverá la igualdad entre mujeres hombres y se prohibirá la discriminación motivada por origen étnico o nacional, género, edad, discapacidad, condición social, condición de salud, religión, opiniones, preferencias sexuales, estado civil o cualquier otra que atente contra la dignidad humana y tenga por objeto o resultado anular o menoscabar los derechos y libertades de las personas.

Libro 49, diciembre de 2017, Tomo I, página 119

¹² SUP-RAP-0452/2021, página 90.

¹³ Tesis 1a. CCLXIII/2018 (10a.), de rubro INTERPRETACIÓN CONFORME Y PRINCIPIO DE INTERPRETACIÓN MÁS FAVORABLE A LA PERSONA. SU APLICACIÓN TIENE COMO PRESUPUESTO UN EJERCICIO HERMENÉUTICO VÁLIDO. publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación.

Libro 61, Diciembre de 2018, Tomo I, página 337.

Asimismo, de la lectura del numeral 92, fracción XXVI, de la ley electoral local deriva en forma expresa la posibilidad de que este órgano colegiado **interprete** la mencionada normativa electoral, lo cual se observa a continuación:

«**Artículo 92.** Son atribuciones del Consejo General, las siguientes:

[...]

XXVI. Desahogar las dudas que se le presenten sobre la aplicación e **interpretación** de esta Ley;»

En el mismo sentido, se observa en la fracción II del artículo recién citado que, el Consejo General de este *Instituto* tiene la facultad de: «Dictar normas y previsiones destinadas a hacer efectivas las disposiciones de esta Ley»; de modo que, resulta palpable, que no asiste la razón a ciudadano impugnante cuando refiere que la ley electoral local no contempla la atención al principio de paridad tal como se estableció en las bases de la convocatoria.

c) El agravio en que el ciudadano que impugna señala que en la convocatoria no se estableció con claridad la cantidad de hombres y mujeres que integrarían la terna, sino solo que se buscaría atender el principio de paridad, sin que lo convirtiera en obligatorio, resulta **infundado**.

Es infundado el agravio en cita, pues en la base quinta, numeral 7, de la convocatoria a la consulta pública aprobada mediante el acuerdo CGIEEG/017/2022, si bien no se estableció la cantidad de hombres y mujeres que integrarían la terna, sí se señaló de forma expresa que en la integración de la terna se buscaría atender el principio de paridad. Lo cual, de conformidad con lo dispuesto en la jurisprudencia 11/2018, de rubro PARIDAD DE GÉNERO. LA INTERPRETACIÓN Y APLICACIÓN DE LAS ACCIONES AFIRMATIVAS DEBE PROCURAR EL MAYOR BENEFICIO PARA LAS MUJERES, debe ser interpretado y aplicado procurando el mayor beneficio a favor de las mujeres, aún y cuando no se incorporen explícitamente criterios interpretativos específico de la normativa.

Pues ello, «exige adoptar una perspectiva de la paridad de género como mandato de optimización flexible que admite una participación mayor de mujeres que aquella que la entiende estrictamente en términos cuantitativos, como cincuenta por ciento de hombres y cincuenta por ciento de mujeres.»¹⁴

Además, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido en la tesis con rubro IGUALDAD Y NO DISCRIMINACIÓN POR CUESTIONES DE GÉNERO. PARA ANALIZAR SI UNA LEY CUMPLE CON ESTE DERECHO FUNDAMENTAL, DEBE TENERSE EN CUENTA QUE LA DISCRIMINACIÓN PUEDE SER DIRECTA E INDIRECTA¹⁵, que la discriminación indirecta «se actualiza cuando... se genera como resultado de leyes, políticas o prácticas que, en apariencia, son neutrales, pero que impactan adversamente en el ejercicio de los derechos de ciertos grupos o personas».

¹⁴ Consultable en:

<https://www.te.gob.mx/IUSEapp/tesisjur.aspx?idtesis=11/2018&tpoBusqueda=S&sWord=11/2018>

¹⁵ Disponible para su consulta en la siguiente dirección electrónica: <https://sjf2.scjn.gob.mx/detalle/tesis/2007338>

Asimismo, la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación al resolver el recurso de apelación SUP-RAP-0452/2021,¹⁶ señaló que el principio de paridad «se entiende como una medida constitucional que tiene como finalidad garantizar la participación efectiva de las mujeres en cualquier toma de decisión de la vida pública del país y, las normas que se refieran a ellas, aun cuando estén redactadas en términos neutrales, deberán procurar su mayor beneficio, atendiendo a la exclusión histórica y estructural de que han sido objeto».

Así, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 215 de la *Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación* la jurisprudencia del Tribunal Electoral es obligatoria para las autoridades electorales locales, cuando se declare jurisprudencia en asuntos relativos a derechos político electorales de los ciudadanos y ciudadanas o en aquéllos en que se hayan impugnado actos o resoluciones de esas autoridades, en los términos previstos por la *Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos* y las leyes respectivas. Además, el artículo 217 de la ley en cita establece que la jurisprudencia del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación será obligatoria para el Tribunal Electoral.

Por lo anterior, es que se tiene por infundado la aseveración realizada por el ciudadano Carlos Enrique Mendoza Santibáñez.

d) Son inoperantes los argumentos impugnativos relativos a que la decisión tomada por el Consejo General resulta arbitraria y violenta los principios de igualdad de oportunidades, transparencia, equidad y objetividad, pues en el caso, el recurrente no expresa los motivos que evidencien los agravios que le causa el acto reclamado, pues sólo se concreta a efectuar meras afirmaciones carentes de fundamento o sustento, sin dar las razones por las que llega a sus conclusiones.

Así, el recurrente no dice el por qué resulta arbitraria y violentadora de los principios de igualdad de oportunidades, transparencia, equidad y objetividad, como lo afirma, para que este Consejo General esté en aptitud de analizar si efectivamente, como lo aduce, fue incorrecto lo razonado en el acuerdo que impugna; ello es así, pues tal y como se refirió en el apartado 3.8. de esta resolución, el recurso de revocación se rige por el principio de estricto derecho, por lo que no procede la suplencia de la queja, por tanto, este Consejo General no puede complementar las deficiencias u omisiones en el planteamiento de los agravios cuando no se deduzcan claramente de los hechos expuestos, permitiéndosele únicamente conocer y resolver con base en aquellos argumentos expresamente planteados por quien promovió el recurso.

Por tanto, con esos planteamientos, el recurrente lo único que hace es efectuar meras afirmaciones subjetivas sin sustento alguno, sin dar razones por las cuales llega a sus conclusiones, lo cual torna insuficiente el agravio en estudio. En tal virtud, dado que el ciudadano Carlos Enrique Mendoza Santibáñez en manera alguna expresó los motivos que pongan de manifiesto los vicios que le atribuye al acuerdo CGIEEG/023/2022 que reclama, lo procedente es desestimar, por inoperante, el concepto de agravio de que se trata.

Como apoyo de la calificativa dada al presente agravio, se cita el contenido de la siguiente jurisprudencia:

¹⁶ Consultable en:
https://www.te.gob.mx/Informacion_judiccial/sesion_publica/ejecutoria/sentencias/SUP-RAP-0452-2021.pdf

«CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. AUN CUANDO PARA LA PROCEDENCIA DE SU ESTUDIO BASTA CON EXPRESAR LA CAUSA DE PEDIR, ELLO NO IMPLICA QUE LOS QUEJOSOS O RECURRENTES SE LIMITEN A REALIZAR MERAS AFIRMACIONES SIN FUNDAMENTO. El hecho de que el Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación haya establecido en su jurisprudencia que para que proceda el estudio de los conceptos de violación o de los agravios, basta con que en ellos se exprese la causa de pedir, obedece a la necesidad de precisar que aquéllos no necesariamente deben plantearse a manera de silogismo jurídico, o bien, bajo cierta redacción sacramental, pero ello de manera alguna implica que los quejosos o recurrentes se limiten a realizar meras afirmaciones sin sustento o fundamento, pues es obvio que a ellos corresponde (salvo en los supuestos legales de suplencia de la queja) exponer razonadamente el por qué estiman inconstitucionales o ilegales los actos que reclaman o recurren. Lo anterior se corrobora con el criterio sustentado por este Alto Tribunal en el sentido de que resultan inoperantes aquellos argumentos que no atacan los fundamentos del acto o resolución que con ellos pretende combatirse.»¹⁷

Por consiguiente, no le asiste la razón al ciudadano impugnante, por lo que procede confirmar el acuerdo CGIEEG/023/2022.

Sirve de apoyo a la decisión lo señalado por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la jurisprudencia de rubro DERECHO FUNDAMENTAL A UN RECURSO JUDICIAL EFECTIVO. EL HECHO DE QUE LAS ACCIONES INTENTADAS POR LOS GOBERNADOS NO SE RESUELVAN FAVORABLEMENTE A SUS INTERESES NO CONSTITUYE, EN SÍ MISMO, UNA VIOLACIÓN DE AQUÉL «el hecho de que las acciones intentadas por los gobernados no se resuelvan favorablemente a sus intereses, no significa que no tuvieron acceso a un recurso efectivo para proteger sus derechos, pues si bien es cierto que dichos recursos deben estar disponibles para el interesado, para resolver efectiva y fundadamente el asunto planteado y, en su caso, proveer la reparación adecuada, también lo es que no siempre y, en cualquier caso, cabría considerar que los tribunales deban resolver el fondo del asunto planteado, favorablemente, sin que importe verificar la procedencia de sus pretensiones.»¹⁸

4. PUNTO RESOLUTIVO.

ÚNICO. Se confirma el acuerdo CGIEEG/023/2022 emitido por el Consejo General del Instituto Electoral del Estado de Guanajuato, en sesión ordinaria del veintinueve de abril, mediante el cual se aprobó la terna, derivada de la consulta pública realizada por el Consejo General del Instituto, que fue remitida al Congreso del Estado de Guanajuato para la designación de la persona titular del Órgano Interno de Control.

Notifíquese personalmente al ciudadano Carlos Enrique Mendoza Santibáñez, así como a la tercera interesada, ciudadana Siboney Ortega Aviña; por oficio al Congreso del Estado de Guanajuato; y por estrados.

¹⁷ Registro digital: 185425. Publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo XVI, Diciembre de 2002, página 61.

¹⁸ Registro digital: 2006472. Publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 6, mayo de 2014, Tomo I, página 541.

La presente resolución se aprobó por unanimidad de votos de las consejeras y los consejeros electorales que integran el Consejo General del Instituto Electoral del Estado de Guanajuato, y con apoyo en lo previsto por los artículos 93, fracción IV, y 98, fracción VII, de la *Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de Guanajuato*, la firman la presidenta del Consejo General y la secretaria ejecutiva del Instituto Electoral del Estado de Guanajuato. Conste.

